PERIODICO OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.

Las leyes y demás disposiciones de carácter oficial son obligatorias por el solo hecho de publicarse en este periódico.

TOMO LXIII.

PACHUCA DE SOTO, 16 DE MARZO DE 1930.

NUM. 11.

CONDICIONES:

Este periódico se publicará los días 1º, 3, 16 y 24 de cada mes.
Las suscripciones se reciben en la Administración de Rentas de cada Distrito y el precio de cada número será de diez centavos, por suscripción semestral.
Los números sueltos o atrasados, valen veinte centavos, y se expenden en las Administraciones de Rentas.

DIRECCION:

LA SECRETARÍA GENERAL.

Registrado como artículo de segunda clase el 25 de febrero de 1922.

CONDICIONES:

Los remitidos y avisos se dirigirán a la dirección de este periódico y según su clase se insertarán gratis o a precios convencionales, conforme a los artículos 110 y 111 de la ley orgánica de Hacienda.—Los avisos, edictos, etc., etc., que se remitan de cualquier punto del Estado, no se publicarán si no vienen acompañados del certificado de entero hecho en la respectiva Administración o Recaudación de Rentas.

GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO

2959

BARTOLOME VARGAS LUGO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES, SABED.

Que la H. XXX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, ha tenido a bien expedir el siguiente

“DECRETO NUMERO 158.

— El H. XXX Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, decreta:

Artículo 1º.—Se faculta al Ejecutivo del Estado para que conforme a la Ley, haga la donación de la Casa número 32 y un Obrador de Panadería, ubicados en la 3a. calle de Morelos de esta Capital y que son de la propiedad del Gobierno, a la “Asociación Protectora de la Infancia de Pachuca, Hgo.”, para el exclusivo uso del Hogar Infantil, que quedará al servicio público; cuyo valor anterior era de \$ 14,735.25, siendo el actual, el de \$ 22,807.20.

Artículo 2º.—En caso de que los inmuebles a que se ha hecho mención, dejen de destinarse para el Hogar Infantil, volverán a poder del Gobierno.

Al Ejecutivo del Estado, para su sanción y cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, en Pachuca de Soto, a los 11 días del mes de marzo de mil novecientos treinta.—Diputado Presidente, *Fidel Meneses*.—Diputado Secretario, *Lic. Rodolfo Vera*.—Diputado Secretario, *Gabriel Olivares*.—Rúbricas”.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Pachuca de Soto, a los catorce días del mes de marzo de mil novecientos treinta.—*Bartolomé Vargas Lugo*.—El Secretario General, *Lic. David Moreno Tejeda*.

2964

BARTOLOME VARGAS LUGO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES SABED:

Que la H. XXX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, ha tenido a bien expedir el siguiente

“DECRETO NUMERO 159.

El H. XXX Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, decreta:

ARTICULO UNICO.—Se decreta un descuento de 10% sobre los sueldos que marca el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado, para todos los empleados y funcionarios en general.

TRANSITORIO.—Este Decreto surtirá sus efectos desde la presente fecha.

Al Ejecutivo del Estado, para su sanción y cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado en Pachuca de Soto, a los once días del mes de marzo de mil novecientos treinta.—Diputado Presidente, *Fidel Meneses*.—Diputado Secretario, *Lic. Rodolfo Vera*.—Diputado Secretario, *Gabriel Olivares*.—Rúbricas”.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Pachuca de Soto, a los catorce días del mes de marzo de mil novecientos treinta.—*Bartolomé Vargas Lugo*.—El Secretario General, *Lic. David Moreno Tejeda*.

2968

BARTOLOME VARGAS LUGO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES, SABED:

Que la H. XXX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, ha tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO NUMERO 160.

El H. XXX Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, decreta:

Artículo 1º.—Se suprime la Escuela Normal para Maestros “Benito Juárez”, como establecimiento de existencia propia.

Artículo 2º—Se crea la Escuela Superior para Ambos Sexos.

Artículo 3º—Se crea, como parte integrante del Instituto Científico y Literario del Estado, un Departamento de Normal, en donde se seguirán los mismos estudios que para Maestros se hacen actualmente en la misma Escuela Normal "Benito Juárez".

Artículo 4º—A las personas que quieran seguir la carrera del Magisterio sólo se les exigirán aquellas materias que forman el plan de estudios de la referida Normal.

Artículo 5º—Se crearán en el Instituto como especiales del Departamento de Normal, las Cátedras para las asignaturas de carácter técnico de la carrera de Maestro de Educación Primaria.

Artículo 6º—Para el desempeño de estas cátedras se designarán por el Ejecutivo del Estado, Maestros Normalistas de reconocida competencia a propuesta de la Dirección General de Educación.

Artículo 7º—La Dirección de Educación, de acuerdo con la Dirección del Plantel, procurará que el espíritu del Departamento de Normal, en la parte propiamente técnica, esté de acuerdo con los ideales de la Escuela Primaria, para que ésta y la Normal se hallen siempre perfectamente vinculadas entre sí. en tal virtud la Dirección del Establecimiento pondrá en vigor las sugerencias que la Dirección de Educación le presente sobre la marcha del Departamento de Normal, en lo relativo a las materias de carácter profesional.

Artículo 8º—Se crea el puesto de Jefe del Departamento de Normal dentro de la nueva organización del Instituto. Este Jefe del Departamento tendrá a su cargo las clases de práctica y técnica de la enseñanza en los tres cursos del programa y será el encargado, de acuerdo con la Dirección del Instituto, de imprimir al Departamento, las modalidades propias de su carácter profesional. En la parte técnica, el Jefe del Departamento dependerá inmediatamente de la Dirección General de Educación.

Al Ejecutivo del Estado, para su sanción y cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado en Pachuca de Soto, a los once días del mes de marzo de mil novecientos treinta.—Diputado Presidente, *Fidel Menses*—Diputado Secretario, *Lic. Rodolfo Vera*.—Diputado Secretario, *Gabriel Olivares*.—Rúbricas".

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Pachuca de Soto, a catorce de marzo de mil novecientos treinta.—*Bartolomé Vargas Lugo*.—El Secretario General, *Lic. David Moreno Tejeda*.

BARTOLOME VARGAS LUGO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES, SABED: Que la H. XXX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, ha tenido a bien expedir el siguiente

"DECRETO NUMERO 161.

El H. XXX Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, decreta:

ARTICULO UNICO.— Se reforman las Partidas números 1579 al 1584 y 1645 al 1665 del Presupuesto de Egresos vigente, de la siguiente manera:

INSTITUTO CIENTIFICO Y LITERARIO.

ESCUELAS SECUNDARIA, NORMAL, PREPARATORIA Y POLITECNICA.

Partida número.		Cuota diaria	Asignación anual.
1579	Un Director.....	\$ 16.60	\$ 6,059.00
1580	Un Secretario.....	11.00	4,015.00
1581	Un Prefecto Bibliotecario...	5.70	2,080.50
1582	Un Prefecto Pagador.....	5.70	2,080.50
1583	Un Prefecto Auxiliar.....	4.75	1,733.75
1584	Dos Taquígrafos, a \$3.33 cada uno.....	6.66	2,430.90
1645	Jefe del Departamento Normal. Prof. de tres cursos clase diaria de Práctica y Técnica Escolar.....	11.00	4,015.00
1646	Un Prof. de Higiene Escolar.....	1.50	547.50
1647	Un Prof. de Psicología de la Educación. 1er. curso. Cinco clases.....	2.50	912.50
1648	Un Prof. de Principios de Educación. 1er. curso. Cinco clases.....	2.50	912.50
1649	Un Prof. de Psicología de la Educación. 2º curso. Cinco clases.....	2.50	912.50
1650	Un Prof. de Principios de Educación. 2º curso. Cinco clases.....	2.50	912.50
1651	Un Prof. de Organización y Administración Escolar. Cinco clases.....	2.50	912.50
1652	Un Prof. de Historia de la Educación. Epoca Moderna. Tres clases.....	1.50	547.50
1653	Un Prof. de Escritura. Cinco clases.....	2.50	912.50
1654	Un Prof. de Taquigrafía. Tres clases.....	1.50	547.50
1655	Un Prof. de Mecanografía. Tres clases.....	1.50	547.50
1656	Un Prof. de Música. 1º y 2º cursos. Cinco clases.....	2.50	912.50
1657	Un Director.....	10.00	3,650.00
1658	Tres Profesores para 1er. año. a \$5.00 cada uno....	15.00	5,475.00
1659	Tres Profesores para 2º año, a \$5.00 cada uno.....	15.00	5,475.00
1660	Dos Profesores de Inglés. Tres clases, a \$1.50 cada uno.....	3.00	1,095.00
1661	Dos Profesores de Francés. Tres clases, a \$1.50 cada uno.....	3.00	1,095.00
1662	Un Profesor de Ejercicios Físicos. Seis clases.....	3.00	1,095.00

1663	Un Profesor de Música. Seis clases.....	3.00	1,095.00
1664	Un Conserje.....	2.50	912.50
1665	Un Mozo.....	2.00	730.00

TRANSITORIOS:

I.—Quedan canceladas las Partidas restantes que se refieren a la Escuela Normal.

II.—Este Decreto surtirá sus efectos desde el 20 de marzo del año en curso.

Al Ejecutivo del Estado, para su sanción y cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, en Pachuca de Soto, a los once días del mes de marzo de mil novecientos treinta.—Diputado Presidente, *Fidel Meneses*.—Diputado Secretario, *Lic. Rodolfo Vera*.—Diputado Secretario, *Gabriel Olivares*.—Rúbricas”.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Pachuca de Soto, a los catorce días del mes de marzo de mil novecientos treinta.—*Bar- toloomé Vargas Lugo*.—El Secretario General, *Lic. David Moreno Tejeda*.

BARTOLOME VARGAS LUGO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES, SABED:

Que la H. XXX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, ha tenido a bien expedir el siguiente:

“DECRETO NUMERO 162

El H. XXX Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, decreta:

ARTICULO UNICO: — Se reforma la Constitución Política del Estado, en la forma siguiente:

Art. 41. Son atribuciones del Congreso:

- I.—.....
- VIII.—Ratificar los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia expedidos por el C. Gobernador del Estado. Si la Cámara no resolviere sobre la ratificación o no ratificación de dichos nombramientos, dentro del término de diez días, se tendrán por aprobados los nombramientos. Sin la aprobación de la Cámara, no podrán tomar posesión los Magistrados nombrados por el C. Gobernador del Estado. En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de una misma vacante, el Gobernador hará un tercer nombramiento que surtirá sus efectos desde luego como provisional, y que será sometido a la aprobación del Congreso en el siguiente período ordinario de sesiones. En este período de sesiones, dentro de los primeros diez días, la Cámara deberá aprobar o reprobar el nombramiento y si lo aprueba o no resuelve, el Magistrado nombrado provisionalmente continuará en sus funciones con el carácter de definitivo. Si la Cámara desecha el nombramiento, cesará desde luego el Magistrado provisional y el Gobernador someterá nuevo nom-

bramiento a la aprobación del Congreso, en los términos señalados. Cuando por enfermedad o licencia de alguno de los Magistrados, no se pudiere integrar el Tribunal Superior de Justicia, los nombramientos provisionales que el C. Gobernador extienda para cubrir la vacante, no están sujetos a ratificación del Congreso, siempre que la ausencia del Magistrado Propietario no exceda de tres meses.

IX.—.....

Art. 53.—Son atribuciones del Gobernador, las siguientes:

XIII.—Nombrar y remover libremente al Secretario General de Gobierno, al Procurador General de Justicia en el Estado, a los Agentes del Ministerio Público y a todos los empleados que conforme a la Constitución y a las Leyes, no deban ser nombrados por otra autoridad.

Nombrar los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia con aprobación del Congreso; y Magistrados provisionales sin la aprobación de este alto Cuerpo.

XIV.—.....

Art. 61.—El Tribunal Superior de Justicia estará formado por tres Magistrados que durarán en sus cargos cuatro años y tomarán posesión el día primero de abril.

Art. 64.—Son facultades del Tribunal Superior:

IV.— Conocer de los recursos de apelación y denegada apelación; y de la revisión de los fallos dictados en negocios criminales.

V.— Conocer de las competencias de jurisdicción que se susciten entre los Jueces del Estado.

VI.— Acordar por sí, o a propuesta del Ejecutivo, el cambio de los Jueces de Primera Instancia de un Distrito a otro; pero sin bajarlos de categoría o disminuirles el sueldo.

VII.—Conceder licencias hasta por tres meses a los Jueces de Primera Instancia.

VIII.—Formar su Reglamento Interior.

IX.—Las demás que determine esta Constitución y le confieran otras Leyes que con posterioridad a élla se dicten.

Art. 95.—Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Las proposiciones que tengan este objeto, deberán estar suscritas por tres Diputados o iniciadas por el Ejecutivo, por el Tribunal Superior de Justicia o por cinco Ayuntamientos. Estas iniciativas se sujetarán a los trámites establecidos para la expedición de las Leyes en los artículos 32 y 33; pero requiere la aprobación de más de los dos tercios del número total de Diputados.

TRANSITORIOS.

I.—Estas reformas empezarán a surtir sus efectos desde la fecha de su publicación en el Periódico Oficial.

II.—El primer período de cuatro años que deberán durar los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, comenzará el día primero de abril del corriente año, y otorgarán la protesta de ley ante el Ejecutivo del Estado.

Al Ejecutivo del Estado, para su sanción y cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, en Pachuca de Soto, a los catorce días del mes de marzo de mil novecientos treinta.—Diputado Presidente, *Fidel Meneses*.—Diputado Secretario, *Lic. Rodolfo Vera*.—Diputado Secretario, *Eduardo Mayida*. Rúbricas”.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Pachuca de Soto, a quince de marzo de mil novecientos treinta.—*Ing. Bartolomé Vargas Lugo*.—El Secretario General, *Lic. David Moreno Tejeda*.

BARTOLOME VARGAS LUGO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES, SABED: Que la H. XXX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, ha tenido a bien expedir el siguiente

“DECRETO NUMERO 163.

El H. XXX Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, decreta:

Artículo 1º.—Se reforma la Ley Orgánica de Tribunales como sigue:

Artículo 41.—El Tribunal Superior de Justicia se compondrá de tres Magistrados, y funcionará siempre en Pleno.

Artículo 42.—El Pleno se compondrá de todos los Magistrados que integran el Tribunal, pero bastará la presencia de dos de ellos para que pueda constituirse y funcionar. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos; en caso de empate, por no concurrencia de uno de los Magistrados, se resolverá el asunto en las sesiones siguientes hasta que hubiere mayoría.

Artículo 43.—Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia reunirán los requisitos que exige la Constitución Política del Estado, serán nombrados por el Ejecutivo, y durarán en su cargo cuatro años.

Artículo 44.—El Tribunal Superior de Justicia tendrá un Presidente con las atribuciones que le confiera la Ley, durará en su encargo un año y podrá ser reelecto.

Artículo 45.—El Tribunal Superior de Justicia tendrá un Secretario de Acuerdos y un Secretario Auxiliar quienes deberán llenar los requisitos exigidos para los Jueces de Primera Instancia. Tendrá también un Actuario y además los empleados subalternos que determine el Presupuesto de Egresos.

Artículo 46.—Son atribuciones del Tribunal Superior de Justicia:

I.—Proponer terna al Gobernador del Estado para el nombramiento de los Jueces de Primera Instancia

II.—Nombrar y remover libremente a sus Secretarios y Empleados.

III.—Conocer de las causas de responsabilidad oficial de los Jueces y Agentes del Ministerio Público.

IV.—Hacer la declaración de haber o no lugar a proceder por delitos comunes cometidos por los Funcionarios a que se refiere la fracción anterior.

V.—Imponer, en los casos en que expresamente no se encomiendan por esta Ley al Presidente del Tribunal Superior, las correcciones disciplinarias que procedan.

VI.—Aprobar, cuando proceda, las correcciones disciplinarias que hayan sido impuestas, de acuerdo con la presente ley, por el Presidente del Tribunal Superior.

VII.—Acordar el cambio de los Jueces de Primera Instancia de un Distrito a otro, pero sin bajarlos de categoría ni disminuirles el sueldo.

VIII.—Destituir a los funcionarios y empleados de su dependencia, por el mal servicio o conducta irregular, consignando al responsable, todo caso, al Ministerio Público.

IX.—Conceder licencias a los Jueces de Primera Instancia, hasta por tres meses, salvo en lo dispuesto en la fracción XV del artículo 47.

X.—Conocer de las controversias en que el Estado tome parte, salvo lo dispuesto por la Constitución Federal.

XI.—Conocer de los recursos de apelación denegada apelación.

XII.—Conocer de las competencias de Jurisdicción que se susciten entre los Jueces del Estado.

XIII.—Conocer de las quejas que se formen por invasiones de jurisdicción.

XIV.—Conocer de las competencias que susciten entre una Autoridad Judicial y otra administrativa, ambas del Estado.

XV.—Conocer de las recusaciones con interpuestas en contra de los Jueces de Primera Instancia, y de los casos de excusas propuestas por éstos y que conforme al Código de Procedimientos Civiles deben ser calificadas por el Tribunal.

XVI.—Elegir su Presidente de entre los miembros que lo forman.

XVII.—Elegir los Magistrados que deban hacer ponencias en materia civil y penal.

XVIII.—Presentar al Congreso iniciativa de Ley en materia de administración de justicia y de codificación.

XIX.—Erigirse en Gran Jurado, para ejercer las atribuciones a que se refiere el artículo 47 de la Constitución Política del Estado.

XX.—Formar su Reglamento Interior.

XXI.—Las demás que le confieran las Leyes.

Artículo 47.—Son atribuciones del Presidente del Tribunal Superior de Justicia:

I.—Recibir quejas o informes, de palabra o escrito, sobre demoras, excesos, o faltas de despacho de los negocios. Si las faltas fueren leves, dictará las providencias oportunas de corrección y remedio; pero si fuesen graves, cuenta el Tribunal para que éste dicte el correspondiente.

II. — Dictar las medidas que estime oportunas para la mejor marcha de la Administración de Justicia.

III. — Vigilar que todos los empleados del ramo judicial cumplan estrictamente con sus deberes.

IV. — Visitar cuando lo estime conveniente los Juzgados y Cárceles dando cuenta de esas visitas al Tribunal.

V. — Examinar las actas de visita de Cárceles y los Estados de los negocios criminales que remitan los jueces.

VI. — Imponer correcciones disciplinarias a los Jueces funcionarios y empleados subalternos, en la forma y términos prescritos en el capítulo relativo de la presente ley; y a los abogados, procuradores y litigantes cuando falten al respeto debido a ese H. Cuerpo.

VII. — Presidir los acuerdos del Tribunal.

VIII. — Dar cuenta al Tribunal de todos los actos que lleve a cabo en el ejercicio de sus funciones, y muy particularmente, de las correcciones disciplinarias que imponga.

IX. — Representar al Tribunal Superior de Justicia en los actos oficiales.

X. — Llevar la correspondencia del Tribunal Superior.

XI. — Recibir las protestas que deben otorgar con motivo de su nombramiento. los Jueces de lo Civil Penales, foráneos de Primera Instancia, Asesores, los Defensores de Oficio, los empleados del Tribunal, el Conserje y la servidumbre del Palacio de Justicia.

XII. — Exigir la presentación de los títulos profesionales de los funcionarios que presten sus servicios en la Administración de Justicia, y que conforme a la ley deban ser letrados.

XIII. — Registrar los títulos profesionales de abogado que se presenten al efecto, exigiendo la comprobación de los estudios respectivos.

XIV. — Señalar en cada año las vacaciones para los funcionarios del Poder Judicial.

XV. — Conceder licencias económicas que no excedan de quince días, con goce de sueldo o sin él, a los Magistrados, Jueces y Empleados subalternos de la Administración de Justicia; salvo las facultades que a este respecto son inherentes a los Jueces.

XVI. — Poner en conocimiento del Tribunal Superior las faltas absolutas de los Jueces de Primera Instancia, y las temporales que deban ser suplidas, a efecto de que se proceda a formar la terna correspondiente. Promover el nombramiento de los empleados subalternos del Tribunal, en caso de vacante.

XVII. — Poner en conocimiento del Gobernador del Estado las faltas absolutas de los Magistrados, y las temporales que deban ser suplidas por nuevo nombramiento, para que obre con arreglo a sus facultades constitucionales.

XVIII. — Formar el proyecto del presupuesto de Egresos del Poder Judicial.

XIX. — Tener a su cargo la policía de los edificios que ocupen el Tribunal y Juzgados, dictando las medidas que estime necesarias para su conservación e higiene y la distribución de las ofici-

nas judiciales en sus diversos departamentos; y para este efecto, los edificios, sus conserjerías, servidumbres y mobiliario, estarán bajo sus órdenes.

XX. — Autorizar en unión del Secretario de Acuerdos, las actas del Tribunal.

XXI. — Llevar con toda escrupulosidad las hojas de servicios de todos los funcionarios y empleados de la Administración de Justicia, haciendo en ellas las anotaciones que procedan, muy especialmente que se refieran a quejas aun cuando se declaren infundadas, y correcciones disciplinarias que se hayan impuesto, y los motivos de ellas.

XXII. Las demás que le confiera la ley.

SECCION QUINTA.

DE LOS SECRETARIOS Y EMPLEADOS DEL TRIBUNAD SUPERIOR

Artículo 48. — Al Secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia corresponde:

I. — Autorizar las actas del Tribunal Superior.

II. — Autorizar los proveídos del mismo, y las copias que se expidieron.

III. — Las demás que le asigne la Ley, y el Reglamento Interior del Tribunal.

Artículo 49. — El Secretario Auxiliar tendrá las facultades y obligaciones que le asigne el Reglamento Interior del Tribunal Superior.

Artículo 50. — El actuario del Tribunal Superior hará las notificaciones y citaciones, y practicará todas las diligencias que deban hacerse fuera del Tribunal y tendrá fé pública en todo lo relativo al desempeño de sus funciones.

Artículo 51. — Para ser empleado del Tribunal Superior de Justicia se requiere:

I. — Ser mexicano.

II. — Tener la aptitud necesaria para el desempeño del cargo.

III. — Ser mayor de edad, y de notoria moralidad.

Artículo 52. — Los Secretarios y empleados subalternos del Tribunal tienen obligación de concurrir puntualmente a sus correspondientes labores, a los horas del despacho ordinario y extraordinario que se determinen, de desempeñar las labores oficiales que se les encomienden conforme al Reglamento Interior, y guardar a sus superiores el respeto y consideraciones que se les deben por sus cargos.

Artículo 2º. Se suprimen los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica de Tribunales.

Al Ejecutivo del Estado, para su sanción y cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, en Pachuca de Soto, a los catorce días de marzo de mil novecientos treinta. — Diputado Presidente, *Fidel Meneses* — Diputado Secretario, *Lic. Rodolfo Vera*. — Diputado Secretario, *Eduardo Mayida*. — Rúbricas".

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Pachuca de Soto, a quince de marzo de mil novecientos treinta. — *Ing. Bartolomé Vargas Lugo*. — El Secretario General, *Lic. David Moreno Tejeda*.

BARTOLOME VARGAS LUGO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES, SABED:

Que la H. XXX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, ha tenido a bien expedir el siguiente

"DECRETO NUMERO 164

El H. XXX Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, decreta:

Artículo Primero.—Se reforma el Capítulo III del Presupuesto de Egresos en vigor, en la forma siguiente:

CAPITULO III.

PODER JUDICIAL

SECCION I.

Tribunal Superior de Justicia.

Partida número	Cuota diaria.	Asignación anual.
1759 Tres Magistrados a \$20.00 cada uno.....	\$ 60.00	\$ 21,900.00
1760 Un Secretario de Acuerdos.	11.20	3,744 90
1761 Un Secretario Auxiliar.....	9.45	3,449.25
1762 Un Actuario.....	4.50	1,642.50
1763 Un Oficial de correspondencia.....	4.00	1,460.00
1764 Un Oficial de Archivo.....	4.00	1,460.00
1765 Cinco Escribientes Mecanógrafos a \$3.00 cada uno..	15.00	4,475.00
1766 Un Comisario.....	2.00	730.00
		\$ 38,861.65

SECCION II.

Archivo del Distrito.

1767 Un Encargado del Archivo. 3.00 1,095.00

Artículo Segundo.—Se suprimen las Partidas 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 y 1775 del Presupuesto de Egresos vigente.

Al Ejecutivo del Estado para su sanción y cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, en Pachuca de Soto, a los catorce días del mes de marzo de mil novecientos treinta.—Diputado Presidente, *Fidel Meneses*.—Diputado Secretario, *Lic. Rodolfo Vera*.—Diputado Secretario, *Eduardo Mayida*.—Rúbricas".

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Pachuca de Soto, a los quince días del mes de marzo de mil novecientos treinta.—*Ing. Bartolomé Vargas Lugo*.—El Secretario General, *Lic. David Moreno Tejerla*.

PODER JUDICIAL

2310

Al margen un sello que dice: República Mexicana.—Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.—2ª. Sala.

Pachuca de Soto, a 30 treinta de agosto de 1929 mil novecientos veintinueve.

VISTA en casación la sentencia pronunciada el trece de junio de mil novecientos veintinueve, por la Primera Sala de este Tribunal Superior de Jus-

ticia, en el toca a la apelación, interpuesta contra la sentencia pronunciada en catorce de mayo del mismo año por el Ciudadano Juez Segundo Penal de este Distrito en la causa que por el homicidio de José María Pérez y lesiones a María Carmen Torres instruyó contra J. Guadalupe Salinas, mexicano originario y vecino de la Ranchería de los Sapos del Mineral del Chico, de diez y seis años de edad al cometer los delitos, soltero, agricultor y de religión católica, defendido por el señor licenciado Samuel Arias; de esta vecindad; y

Resultando Primero.—Que el trece de septiembre de mil novecientos veintidos, se inició en el Juzgado Segundo Penal de este Distrito Judicial, el procedimiento respectivo en averiguación del homicidio de José María Pérez y lesiones de María Carmen Torres a virtud de consignación hecha por el Ministerio Público; durante la secuela del proceso se comprobó plenamente el cuerpo del delito de homicidio así como el de lesiones y la responsabilidad del acusado, por los medios de pruebas aceptados por la ley; se agotó la averiguación, después de haber decretado la formal prisión por los delitos indicados en contra de Salinas, y se mandó dar vista al Ministerio Público quien formuló conclusiones de culpabilidad, considerándolo responsable como autor de los delitos de homicidio y lesiones; la defensa, representada por el licenciado Rodolfo Vera, formuló las de inculpabilidad alegando legítima defensa; celebrada la audiencia de ley, el Juez del conocimiento con fecha catorce de mayo próximo pasado, dictó sentencia condenatoria en los siguientes términos: "Primera: J. Guadalupe Salinas, es criminalmente responsable como autor del delito de homicidio verificado en la persona del que se llamó José María Pérez, de que lo acusa el Ministerio Público.—Segunda: J. Guadalupe Salinas es igualmente responsable como autor del delito de lesiones inferidas a María Carmen Torres, de que lo acusa el Ministerio Público.—Tercera: Por los expresados delitos, en las personas ya mencionadas, se condena a J. Guadalupe Salinas, a sufrir como pena diez años de prisión en el establecimiento que el Gobierno designe, por una cuarta parte, más de tiempo en su caso, que se contará desde el día diecinueve de julio de mil novecientos veintiocho, fecha de su defensión y con derecho a la libertad preparatoria.—Cuarta: Amonestesele para que no reincida. Quinta: Notifíquese, etc."—Contra esta resolución, el procesado y su defensor interpusieron el recurso de apelación que les fué admitido en ambos efectos.

Resultando Segundo.—Tocó a la Primera Sala de este Tribunal Superior conocer del recurso de apelación y legados que fueron los autos principales, mandó dar vista con ellos y el Toca respectivo por el término de ley al defensor de oficio y al Procurador de Justicia; el primero expresó como agravio: "Que el fallo de que se trata le causa agravio al procesado J. Guadalupe Salinas porque no acepta la circunstancia de la riña que se tuvo entre los ofendidos y el acusado, riña que está probada de manera indiscutible y por la cual el acusado obró con rigor tal, que se hizo acreedor a la prisión; pero éste debe durar un tiempo justificado".—El segundo o sea el

Ciudadano Procurador de Justicia, pidió se confirmara la sentencia del inferior por no haber quedado demostrada en autos la riña a que aludió el defensor de Oficio.—La Sala, después de la citación respectiva, providencia notificada al Procurador y defensor de oficio, pronunció su ejecutoria con fecha trece de junio próximo pasado, en los siguientes términos: "Por las mismas consideraciones y fundamentos legales del Ciudadano Juez, y de conformidad con lo pedido por el Ciudadano Procurador de Justicia, la Sala por unanimidad resuelve: Primero: Se confirma el fallo del inferior dictado con fecha catorce de mayo próximo anterior en la causa a que este Toca se refiere, y por el cual condenó a J. Guadalupe Salinas por el homicidio que perpetró en la persona de José María Pérez, y por las lesiones que idirió a María Carmen Torres, a sufrir las pena de diez años de prisión contados desde la fecha en que fué detenido, entendiéndose dicha pena con una cuarta parte más de retención y con derecho a la libertad preparatoria en sus respectivos casos y mandó amenazarlo para que no reincida.—Segundo: Comuníquese al Ejecutivo del Estado la pena impuesta.—Tercero: No hay irregularidades en el proceso por las que pudiera iniciarse un juicio de responsabilidad en contra del Ciudadano Juez sentenciador.—Cuarto: Notifíquese etc."—Esta resolución fué notificada al Procurador de Justicia y defensor de oficio el mismo día de dictada, y con fecha veintinueve del propio junio el procesado J. Guadalupe Salinas, interpuso el recurso de casación y pidió se tuviera como su defensor al señor licenciado Samuel Arias.—La Primera Sala, por acuerdo de seis de julio último, admitió de plano el recurso de casación y ordenó la remisión a esta Sala del proceso y toca respectivos.

Resultando Tercero.—Que el escrito en que el procesado interpuso el recurso de casación, dice textualmente: "CC. Magistrados de la Primera Sala: J. Guadalupe Salinas, en el toca a la apelación que interpuso en contra de la sentencia en primera instancia dictada en el proceso que se me sigue por el homicidio de José María Pérez y lesiones a María Carmen Torres, respetuosamente expongo: No he sido notificado, pero he tenido conocimiento, de que con fecha trece de los corrientes esa H. Primera Sala dictó sentencia confirmando la que en primera instancia se pronunció en el proceso arriba mencionado. Como en los procedimientos de segunda instancia no se han llenado los requisitos legales, y en la sentencia, como en la de primera instancia, la parte resolutive es contraria a la letra de la ley aplicable al caso, con el mayor respeto y estando dentro del tiempo hábil, manifiesto que no estoy conforme con dicha sentencia, y que contra ella interpongo el recurso de casación, por violación de las leyes del procedimiento y en cuanto al fondo del negocio, basándome en los siguientes agravios:—I. No se me corrió traslado por el término de ocho días para expresar agravios, según lo previene el artículo 595 del Código de Procedimientos Penales.—En efecto, al recibirse los autos en esta H. Sala, por auto de treinta de mayo; se mandó correr traslado "al defensor de oficio y al Procurador de Justicia", en lugar de que ese traslado se hiciera al apelante y al Procurador de Justicia. El hecho de que yo no haya te-

nido defensor para segunda instancia no autoriza a ese H. Tribunal a substituir mi voluntad sin antes prevenirme hiciere la designación de defensor. El defensor de Oficio, como lo establecen los artículos 77 y 78 de la Ley Orgánica de Tribunales, tienen obligación de intervenir en todos los procesos en que los acusados no designen defensor particular, cuando soliciten sus servicios. Teniendo yo un defensor nombrado desde primera instancia, no veo porqué y con fundamento en qué preténdese que deba hacerse una designación especial para segunda instancia; esa designación nueva se explica para los procesos seguidos en los Juzgados de los Distritos en que los defensores viven en los mismos distritos y conviene a los acusados nombrar un defensor que radique en esta Ciudad para tramitar el recurso de apelación pero ese nombramiento de defensor en segunda instancia tiene como base la conveniencia y no la disposición de la ley, y por lo tanto mientras no se haga nueva designación de defensor, debe reputarse con ese carácter el nombrado en primera instancia y al tener como defensor al de Oficio, en lugar del particular nombrado, se violan las leyes del procedimiento; violación que se comete después de la sentencia y reclamo en este escrito, como lo previene el artículo 621 del Código de Procedimientos Penales.—II. No se me notificó para resolver en segunda instancia. Esta falta de citación para resolver, viola el artículo 597 parte final, del Código de procedimientos Penales, constituyendo una violación del procedimiento posterior a la sentencia.—III. Las sentencias de primera y segunda instancia, al considerarme responsable de los delitos de homicidio y lesiones, e imponerme la pena de diez años de prisión, contraria la letra del artículo 353 del Código de Procedimientos Penales. En efecto, en mi declaración preparatoria confesé ser el autor de los hechos que se me imputan, pero aduje en mi favor haber obrado en defensa legítima de mi persona; en el proceso no hay datos que contrarian la exculpante de defensa legítima; y la sentencia o sentencias que pretenden imponerme la carga de la prueba de las circunstancias modificativas, violan el artículo 353 del Código de Procedimientos Penales, que me exime de esa prueba. No habiendo datos en contra de dicha exculpante, debe darse plena fé a lo por mí declarado, y absolverseme en lugar de condenarme a diez años de prisión. Los dichos de los ofendidos carecen de valor probatorio legalmente y unicamente sirven para indagar, pero nunca para sentenciar, de otra manera se crea una prueba que no existe en derecho, ya que ni como presunciones pueden tener valor porque no se llenan los requisitos de los artículos 437 y 438 del propio Código. En primera Instancia mi defensor alegó la defensa legítima y si no se hizo esto en segunda instancia fué por los agravios I y II que se manifiestan en este escrito.—Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 632 y 635 del Código de Procedimientos Penales, a ustedes señores Magistrados, atentamente pido:—I. Se admita de plano el recurso de casación que interpongo en contra de la sentencia de trece de los corrientes, dictada en el Toca a la apelación interpuesta en el proceso que se me sigue como homicida de José María Pérez y María Carmen Torres, lesiones a esta última.—II. Que se-

balándose término legal, para continuarlo, se remitan los autos a la Segunda Sala para la tramitación del recurso.—III. Se tenga como mi defensor al señor licenciado Samuel Arias, domiciliado en la casa número dos de la calle del Hospital de esta ciudad, a quien se hará saber su nombramiento para los efectos de su aceptación y protesta y a quien faculto para continuar el recurso.—Pachuca, veinticinco de junio de mil novecientos veintinueve.—Guadalupe Salinas.—Lic. Samuel Arias.—Rúbricas".—La Primera Sala del Tribunal Superior, aceptó como se ha dicho de plano el recurso de casación y remitió los autos principales y el Toca a esta Sala, ante quien se presentó el procesado Salinas por escrito relativo de diez de julio próximo pasado a continuar el recurso pidiendo se pasieran los autos a disposición de las partes por el término de ley lo cual se hizo por acuerdo de quince de julio próximo pasado; con fecha seis del actual se citó a las partes para la "Vista" la que se celebró sin la concurrencia de ellas a las once horas del día veintitres de los corrientes agregándose a los autos del Toca los apuntamientos de alegatos presentados por el defensor del procesado Salinas. Como a la "Vista" no concurren ninguna de las partes, se citó para resolución que es la que hoy se pronuncia.

Considerando Primero.—Que según lo establecido por el artículo 646 del Enjuiciamiento Penal, la Sala previamente debe estudiar y decidir si el recurso de casación ha sido interpuesto legalmente.—Para el efecto debemos ocurrir a las disposiciones de los artículos del 630 al 634 del Código citado que claramente señalan los requisitos legales para la viabilidad de la casación; tales requisitos son:—I. Tiempo; II. Forma; III. Procedencia, es decir, que la violación alegada como agravio para la casación esté comprendida en las disposiciones de los artículos 626 o 629 del Procedimiento Penal, que sea expresada con toda claridad, enumerándola claramente y que se haya alegado como agravio en la segunda instancia cuando fué cometida en la primera; y IV. Que el recurrente no esté substraído a la acción de la Justicia.—Debe entonces la Sala estudiar cada uno de estos puntos para llegar al convencimiento de que los hechos denunciados por el recurrente encajan en las disposiciones legales citadas y resolver así, previamente, si el recurso fué interpuesto en forma legal.

Considerando Segundo.—Respecto al primer requisito o sea el tiempo en que fué interpuesto el recurso, solo basta ver las actuaciones del Toca tramitado en la primera Sala en el recurso de apelación, para llegar al convencimiento de que se cumplió exactamente con lo prevenido en el artículo 632 del Enjuiciamiento penal, puesto que habiendo sido notificada la Ejecutoria de la primera Sala al defensor de oficio, y consiguientemente al procesado puesto que legalmente no puede separarse una personalidad de otra, el día trece de junio próximo pasado y habiéndose interpuesto el recurso el veinticinco del mismo junio, de una a otra fecha no existe el transcurso de quince días que marca la ley antes citada, y por consecuencia, la interposición de la casación fué hecha en tiempo como lo certificó la Secretaría de la Primera Sala.—En consecuencia el primer requisito legal está cumplido: el recurso de casación

ha sido interpuesto en tiempo.—Igualmente está cumplido el IV puesto que el procesado J. Gualupe Salinas, de autos consta, que está recluso en la Cárcel Pública de esta población.

Considerando Tercero.—Por lo que hace al segundo requisito o sea la forma, esta no se reduce solamente a que la promoción sea por escrito sino que tal escrito necesita llenar determinadas formalidades prescritas en los artículos citados en el considerando anterior, como son: que en el escrito deba citarse la ley infringida; precisarse el hecho en que consiste la infracción, explicar el concepto en que por ese hecho resulte violada la ley y alegarse expresamente alguna de las causas enumeradas en los artículos 626 y 629 del Procedimiento Penal. Debemos en consecuencia estudiar si se han llenado esos requisitos pro forma que la ley exige.—El primero y principal, está llenado puesto que la promoción se hizo por escrito; en él se señalan las leyes infringidas precisando el hecho en que consiste la infracción y explicando a su modo, el recurrente, el concepto suyo en que por el hecho resulta violada la ley; pero no señala **EXPRESAMENTE**, sino en general, la causa de la casación.—Efectivamente, alega dos capítulos de violación a leyes de procedimiento, los marcados en su escrito introduciendo el recurso con los números I II. y los hechos en esos capítulos denunciados, no son casables, por que en ninguna de las fracciones del artículo 629 del Código de Procedimientos Penales encajan.—Basta solo leer detenidamente las fracciones que forman el artículo citado, para convencerse de que en ninguna de ellas está comprendido el agravio expresado por el recurrente para interponer el recurso de casación. Y terminantemente ordena el artículo 634 del Enjuiciamiento Penal, que al introducirse el recurso de casación debe alegarse **EXPRESAMENTE ALGUNA** de las causas enumeradas en el artículo 629 del cuerpo de leyes citado tratándose de violación a las leyes del procedimiento; por tanto, el agravio expresado en el punto I del escrito de introducción al recurso no está perfecta y legalmente expresado en dicho escrito; padece tal escrito, en consecuencia de un vicio de forma que hace inadmisibile el recurso.—Y no se pretende alegar, como parece quiere hacer lo el recurrente, que esa violación, caso de existir, está comprendida en las disposiciones del artículo 621 del Procedimiento Penal, pues si se pretendiera que el precepto citado se refiere a las sentencias de primera instancia y la violación se ejecuta en la tramitación de la segunda, el apelante tiene tiempo suficiente, antes de pronunciar la Sala de apelación su sentencia, en reclamar esa violación; máxime cuando débese tener en cuenta que si el procesado interpuso el recurso de apelación, está obligado legalmente a continuarlo, y por consecuencia desde que se le admitió el recurso estaba en la obligación legal, ya por sí ya por conducto de su defensor de primera instancia de apersonarse al Toca; si no lo hizo y dejó que el defensor de oficio tomar en su defensa, tácitamente aceptó sus servicios y al correr el defensor de Oficio traslado para que expresara los agravios que originaron la apelación, se consideró ese traslado al propio procesado, de quien es por voz su defensor. Respecto al agravio expresado

en el segundo punto del escrito de introducción al recurso, "que no se notificó al procesado la citación para sentencia en segunda instancia", además de ser inexacto, pues sí se notificó a su defensor, el de Oficio, adolece de los mismos defectos que el anterior, puesto que nace de una ilegal interpretación de la ley; lo que se refiere al desempeño de las funciones del defensor. La argumentación que el recurrente esgrime, es, además de ilógica, antijurídica, puesto que al ser admitida la apelación por el inferior ésta emplaza y cita a las partes a segunda instancia y por tanto está en la obligación legal el apelante a ocurrir a segunda instancia a continuar el recurso que interpuso; y como en el caso lo interpusieron tanto el procesado como su defensor en primera instancia y ninguno de los dos se apersonó al Toca, la Sala de apelación, estuvo perfectamente en su papel de haber corrido traslado al defensor de oficio, pues de otra manera hubiera vulnerado, ya que ningún defensor particular se presentó, las garantías que concede al procesado el artículo 20 Constitucional y artículo 287 del Enjuiciamiento Penal.—Por último y para concluir con las supuestas violaciones a las leyes del procedimiento, esta Sala de casación declara que no siendo los motivos expresados en el escrito de introducción al recurso, causa de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 629 del Enjuiciamiento Penal y no habiéndose expresado la CHUSAL que motiva la interposición del recurso carece de procedencia legal, éste, por lo que a tales capítulos se refiere, por falta de forma.

Considerando Cuarto.—Queda por estudiar la supuesta violación en cuanto al fondo del negocio que el recurrente hace consistir en que la Sala de apelación no tuvo en cuenta la confesión del procesado para estimar probada la legítima defensa invocada en primera instancia como excluyente de responsabilidad criminal.—Esta Sala de casación, consecuente con lo dispuesto por el artículo 622 del Código de Procedimientos Penales, no puede admitirse como causa para el recurso el hecho de que no haya tomado en cuenta la Sala de apelación la confesión del acusado, tal y como la quiere hacer aparecer el recurrente. La razón es obvia; el artículo citado últimamente, dice: "La violación causada en la primera instancia no puede reclamarse por medio del recurso de casación, sino por vía de agravio de la segunda instancia".—Veamos los agravios expresados por el defensor del procesado en segunda instancia y veremos que alego como único, que la sentencia del inferior le causaba, el que no se hubiera tomado en cuenta la riña que sostiene hubo entre procesado y ofendido; tal fué el único agravio expresado y si hoy se expresa, en la casación, la legítima defensa, éste no puede constituir violación en cuanto al fondo en cuanto al negocio, porque esa violación de la sentencia en primera instancia, (tal y como lo expresa el recurrente en su escrito de introducción al recurso que se tramita), fué cometida en primera instancia y por consiguiente debía haber sido alegado como agravio en la segunda; en ésta por el contrario, se alega la riña, se considera responsable al procesado de un hecho delictuoso, por jamás se invoca la exculpante que ha servido al defensor en este recurso para interponerlo; en consecuencia, y de

acuerdo con el precepto citado (art. 622 del Procedimiento Penal), la violación alegada por el recurrente, no es causa de casación, sino de agravio en la apelación.—Es por tanto imprócedente el recurso por ese capítulo, último del escrito de introducción al recurso.

Considerando Quinto.—Sentado lo anterior, es absolutamente inútil entrar al estudio de la argumentación aduzida por el señor defensor de J. Guadalupe Salinas en sus alegatos, pues además de expresar en ellos otros agravios que no fueron el motivo de la casación, contrariando el artículo 634 del Enjuiciamiento Penal, quedan desvirtuados con lo manifestado en los considerandos anteriores.

Considerando Sexto.—Que de acuerdo con lo prevenido en el artículo 646 del tantas veces citado Código de Procedimientos Penales, la Sala debe resolver sobre la legal interposición del recurso y como antes se ha demostrado que éste ha sido interpuesto ilegalmente por carecer de legal forma y procedencia, a tal declaración debe sujetarse la Sala y mandar devolver el Toca y causa motivo de este recurso a la Sala a que, para que mande ejecutar la sentencia por ella dictada en la ejecutoria que se ha estudiado.

Considerando Séptimo.—Que estableciendo el artículo 648 del multicitado Código de Procedimientos Penales, que las sentencias de casación deben publicarse en el Periódico Oficial del Estado, debe la presente sentencia remitirse en copia al periódico citado para su publicación. Por lo expuesto, con fundamento en los preceptos legales invocados y además en los artículos 643 y relativos del Código de Procedimientos Penales, debe resolverse y se resuelve:

Primero.—El recurso de casación interpuesto por J. Guadalupe Salinas, contra la sentencia pronunciada por la Primera Sala de este H. Tribunal Superior, no lo ha sido legalmente.

Segundo.—En consecuencia, devuélvase el proceso y toca respectivos a la Sala a que, para que mande cumplir su ejecutoria, acompañándole testimonio de esta resolución.

Tercero.—Publíquese este fallo en el Periódico Oficial del Estado para cuyo efecto gírense las órdenes y copias del caso.

Cuarto.—Notifíquese, y en su oportunidad archívese el Toca.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los ciudadanos Magistrados que integran esta Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, siendo ponente el Licenciado Francisco R. Araujo.—Doy fe.—E. G. Boyseauneau.—Francisco R. Araujo.—Manuel Orozco.—J. Martínez S. Srío.—Rúbricas".

El ciudadano Juventino Martínez S., Secretario de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, certifica la presente copia que esta copiada fielmente de su original, y que se expide en cinco fojas útiles, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, en cumplimiento de la ley.

Pachuca de Soto, 21 veintiuno de febrero de mil novecientos treinta 1930.—Doy fe.—E. R.—Art. 287 del Enjuiciamiento Penal.—Vale.—J. Martínez S. Srío.

SECCION AGRARIA

2639

Al margen un sello que dice: República Mexicana.—Estado de Hidalgo.—Comisión Local Agraria.

Al margen.—Acuerdo.—Pachuca de Soto, septiembre de 1929. Cumplido con oficio núm 12366-12367.—Rúbrica.—Al centro.—Registrado bajo el núm. 5313 del libro respectivo.—C. Gobernador del Estado.—Antonio Mendoza y Juan Ortega, nombrados primero y segundo representante para gestionar la dotación de tierras ejidales de la Ranchería denominada "Soté" del Municipio y Distrito de Huichapán, Hgo. Ante Ud. con el debido respeto exponemos: Que acompañamos el acta original en la que fuimos designados representantes por la Ranchería o comunidad de "Soté" y con su representación venimos a solicitar la dotación de tierras ejidales conforme a la Ley. Los vecinos que tienen derecho a las tierras en total son setenta y nueve. Todos vivimos de la agricultura en este lugar, y nos hemos visto precisados a salir a trabajar lejos de nuestra ranchería mencionada, por un salario de treinta a cuarenta centavos por trabajo no menor de diez horas por lo que es urgente la dotación que solicitamos para mejorar la situación económica de esta comunidad que es desesperante. Teniendo en cuenta la ayuda que ha prestado usted a los pueblos esperamos la pronta dotación que solicitamos y que vendrá a cambiar nuestro estado económico. Con lo expuesto a Ud. C. Gobernador, atentamente pedimos se sirva ordenar a la Comisión Local Agraria que tenga por presentados con esta solicitud y en su oportunidad decretar la posesión provisional de las tierras ejidales, debiendo ser afectadas en primer término la Hda. de Tecofani que es la más extensa pues cuenta con más de 1,600 hectáreas y enseguida la Hda. de la Cruz, que tiene una superficie de 5,000 hectáreas. La tercera pertenece la Hda. de Natu que cuenta con 1,500 hectáreas. Protestamos nuestro respeto. Ranchería de "Soté", 11 de septiembre de 1929.—El Primer Representante, Antonio Mendoza.—Segundo Representante, Juan Ortega.—Rúbricas Darío Pérez, Secretario de la Comisión Local Agraria en el Estado, certifica, que la presente es copia fiel debidamente compulsada con su original que obra en el expediente de "Soté". El Srío. de la Comisión Local Agraria, Darío Pérez.

2636

Al margen un sello que dice: República Mexicana.—Estado de Hidalgo.—Comisión Local Agraria.

Al margen. Acuerdo. Pachuca de Soto, enero 23 de 1930. Transcribese al C. Presidente de la Comisión Local Agraria para los efectos que estime convenientes o sea para que se instaure el expediente respectivo. Dígase el trámite.—B. V. L.

Rúbrica.—David Moreno Tejeda. Rúbrica.—Cumplido con Oficio Núm. 1068-1069 Rúbrica.—Al centro.—Gobernación. Registrado bajo el número 500 del libro respectivo. Al Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado. Pachuca Hidalgo. Los suscritos vecinos de la Ranchería de San Isidro del Municipio y Distrito de Tulancingo, de esta Entidad Federativa, ante usted con todo respeto comparecemos para exponer: Que acogiéndonos al Artículo 39 de la Ley de 6 de enero de 1915 y la Ley Agraria en vigor, venimos ante Ud. en solicitud de tierras por carecen completamente de ellas, pues nuestra situación es enteramente afflictiva por no tener terrenos en donde podamos sembrar las semillas que puedan servir de alimento para nosotros y nuestras familias, siendo este motivo también para que no podamos atender la educación de nuestros hijos, pues nuestro único medio de vivir es el de trabajar en el jornal ganando un salario muy corto que no nos es suficiente para el sustento de nuestra familia, y por este motivo nos dirigimos a usted Ciudadano Gobernador suplicando de la manera más atenta y respetuosa se digna ordenar que nuestra solicitud se le dé el trámite correspondiente en la oficina que corresponda. Con el fin de formar nuestro Comité Particular Ejecutivo que se encargue de gestionar en las oficinas correspondientes el trámite de nuestra solicitud, ponemos a la digna consideración de usted a las siguientes personas para que los integren; para presidente, el C. Blas González, para Secretario, Melitón García y para Tesorero José Ma Martínez, a quienes si a bien lo tiene usted pedimos se sirva ordenarles sean expedidos sus nombramientos respectivos para que acrediten su personalidad. Para notificaciones señalamos Estación de Tepenacasco. F. C. C. En espera de que nuestra solicitud merezca la tramitación que corresponda, nos permitimos protestar a usted nuestra sincera gratitud y respeto. Sufragio Efectivo. No Reelección Ranchería de San Isidro, Mpio. de Tulancingo Hgo. enero 13 de 1930.—Blas González, Melitón García, José Ma Martínez, Miguel Elizalde, Manuel Elizalde, Plácido Trejo, Víctor Trejo, Aristeo Díaz, Jesús García, Elpidio Romero, Esteban García, Miguel Mejía, Julián García, Ricardo García, Agapito Vargas, Delfino Saavedra, Angel Sánchez, Crescenciano Hurtado, Baltazar Ortega, Angela Saavedra, Manuel Sánchez.—Rúbricas.

Darío Pérez, Secretario de la Com. Local Agraria en el Estado Certifica: que la presente es copia fiel debidamente compulsada con su original.—El Srío. de la Com. Loc. Agraria, Darío Pérez.

2651

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Comisión Nacional Agraria.—Oficialía Mayor.

VISTO en revisión el expediente sobre dotación de ejidos promovido por los vecinos del pueblo de MELCHOR UCAMPO, antes EL SALTO, Municipio de Tepeji del Río, Estado de Hidalgo, y

Resultando Primero.—Que con fecha 18 de febrero de 1926, los vecinos del pueblo de Melchor Ocam

po, antes El Salto, solicitaron dotación de tierras ante el C. Gobernador del Estado de Hidalgo, quien con fecha 10 de marzo del mismo año turnó dicha solicitud a la Comisión Local Agraria para que siguiera la tramitación correspondiente.

Resultando Segundo.—Que instaurado el expediente respectivo el día 5 de noviembre de 1926, la Comisión Local Agraria mandó publicar la solicitud en el Periódico Oficial del Estado No. 22 correspondiente al 8 de junio de 1926. Dicha Comisión recabó los siguientes datos: que la categoría política del poblado solicitante es la de Pueblo según Decreto No. 68 de H. Congreso del Estado de Hidalgo; que los vecinos del pueblo de Melchor Ocampo, carecen en absoluto de tierras propias con que satisfacer sus necesidades agrícolas; que el pueblo dividido en los barrios de Las Caleras y Derramadero tiene diseminado el caserío en tierras de la hacienda de El Salto; que las lluvias son escasas y su período ordinario dura de junio a septiembre, siendo su mayor precipitación en agosto; que el pueblo se surte de agua de los jagüeyes que se encuentran dentro de los terrenos de dicha finca así como parte de un manantial que tiene un gasto aproximado de 3 litros por segundo; que la producción media en maíz es de 60 x 1 y en cebada de 10 x 1; que las poblaciones más cercanas son Tepeji del Río a 10 kilómetros y Tula a 20 kilómetros; que la única finca afectable es la hacienda de El Salto propiedad de la Sucesión de la señora Guadalupe Terrero Vda. de Algara; que dicha finca según constancia catastral tuvo una superficie de 9339-84-62 Hs., de las que habiéndose tomado 3060 Hs. 78 As. 12 Cs. para dotar a un pueblo del Estado de México, y a cuatro del Estado de Hidalgo, le quedan 6279-06-50 Hs.; que de la mencionada superficie se hizo un levantamiento de 3096 Hs., de las cuales 429-70 Hs. deben considerarse como de temporal de segunda y las 2666-30 Hs. restantes como de terreno pastal cerril.

Resultando Tercero.—Que notificada la propietaria de la hacienda de El Salto para designar representante común, se procedió a la formación de un censo agropecuario, habiendo intervenido como representante de la Comisión Local Agraria el C. Vicente del Río y por parte de los vecinos el C. Trinidad Tovar. Respecto del representante por parte de la finca afectada, que lo fué el C. Salvador García, no quiso formar parte de esta junta, como consta en nota dirigida al C. Vicente del Río de 20 de junio de 1928; por lo cual los dos primeros representantes procedieron a la formación del censo, el cual arrojó un total de 521 habitantes, de los que se listaron a 128 con derecho a tierras por ser jefes de familia y varones mayores de 18 años. El censo agropecuario arrojó un total de 168 cabezas de ganado vacuno, 11 de caballar, 425 de cabrío, 34 de lanar, 83 de asnal y 184 de porcino.

Resultando Cuarto.—Que la Comisión Local Agraria notificó al propietario de la hacienda mencionada a efecto de que dentro del plazo de treinta días hiciera las observaciones que creyera oportunas, habiendo concurrido el señor Carlos Rincón Gallardo como representante de la señora Guadalupe

pe Terrero Vda. de Algara, exponiendo lo que ha que sus derechos convino.

Resultando Quinto.—Que con fecha 27 de noviembre de 1928 la Comisión Local Agraria emitió dictamen proponiendo una dotación de 918 Hs. de la hacienda de El Salto, que serían: 318 Hs. de labor de temporal de segunda y 600 Hs. de terrenos cerriles pastales.

Resultando Sexto.—El C. Gobernador del Estado con fecha 25 de marzo de 1929 falló en los términos propuestos por la Comisión Local habiéndose dado la posesión provisional a los vecinos el 6 de abril del mismo año publicada la resolución del C. Gobernador en el Periódico Oficial del Estado, No. 15 correspondiente al 16 del mismo mes de abril.

Resultando Séptimo.—Que se remitió el expediente a la Comisión Nacional Agraria, fijándose la cédula a que se refiere el artículo 84 de la Ley Reglamentaria vigente, y en su oportunidad se notificó a la propietaria de la hacienda afectada conforme al artículo 87 del mismo Ordenamiento, sin que durante el plazo concedido para alegar, ocurriera en defensa de sus intereses.

Resultando Octavo.—Que al hacer la rectificación del censo, la Comisión Nacional Agraria encontró que se habían dejado de considerar 17 varones mayores de 16 años que conforme al artículo 15 de la Ley Reglamentaria de 21 de marzo del año próximo pasado, tienen derecho al beneficio dotatorio, debiendo por tanto tomarse como base para el cálculo de la dotación definitiva a 145 capacitados.

Considerando Primero.—Que ha quedado demostrada la procedencia de la dotación solicitada por los vecinos del pueblo de Melchor Ocampo, antes El Salto, Municipio de Tepeji del Río, Estado de Hidalgo, de acuerdo con los artículos 30. de la Ley de 6 de enero de 1915, 27 Constitucional y demás relativos de la Ley de 21 de marzo de 1929.

Considerando Segundo.—Que el censo agropecuario fué levantado de acuerdo con las disposiciones de la Ley Reglamentaria vigente, debiendo tomarse como base para la dotación a 145 individuos, en vista de la rectificación hecha al mismo.

Considerando Tercero.—Que la única finca afectable es la hacienda de El Salto que tiene una extensión disponible de 6279-06-50 Hs., y tomando en cuenta la producción media de la tierra que en maíz es de 60 x 1 y que las lluvias son irregulares y escasas, deberá fijarse una parcela individual de 6 Hs. de labor de temporal y 8 Hs. de cerril y agostadero. En consecuencia, deberá afectarse dicha finca con 1054 Hs., de las cuales 318 Hs. serán de labor de temporal, que alcanzan para cubrir las necesidades de 53 personas y 736 Hs. de pastal cerril con que se cubrirán las necesidades de las 92 restantes.

Considerando Cuarto.—Que para cubrir la dotación de las 1054 Hs., deben expropiarse por cuenta del Gobierno Nacional, dejando sus derechos a salvo a la propietaria para que reclame la indemnización a que hubiere lugar, en el tiempo y forma prescritos por la Ley, haciéndose las inscripciones del caso con motivo de las modificaciones que sufra el inmueble afectado con la dotación.

Considerando Quinto.—Que habiéndose declarado de utilidad pública la conservación y propagación de

los bosques y arbolados en todo el territorio nacional, debe advertirse a la comunidad beneficiada con esta dotación, la obligación que contrae de conservar, restaurar y propagar los bosques y arbolados que contengan los terrenos que se les conceden.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 39, 99 y 10 de Ley de 6 de enero de 1915, 27 Constitucional, 135 y demás relativos de la Ley Reglamentaria en vigor, el suscrito, Presidente de la República de acuerdo con el parecer de la Comisión Nacional Agraria, debía resolver y resuelve:

Primero.—Es procedente la dotación de tierras solicitada por el Pueblo de MELCHOR OCAMPO, antes El Salto, Municipio de Tepeji del Río, Estado de Hidalgo.

Segundo.—Se modifica la resolución del C. Gobernador de la citada Entidad Federativa de fecha 25 de marzo de 1929, en los siguientes términos:

Tercero.—Es de dotarse y se dota a los vecinos del mencionado pueblo de Melchor Ocampo, con 1054 Hs. un mil cincuenta y cuatro hectáreas, que se tomarán en su totalidad de la hacienda de El Salto, de las cuales 318 Hs. serán de temporal de segunda y 736 Hs. de cerril pastal. Dichas superficies pasarán al poblado de que se trata con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres y se localizarán de acuerdo con el plano que forme el Departamento Técnico de la Comisión Nacional Agraria, aprobado por quien corresponda.

Cuarto.—Decrétase, para cubrir la dotación de que se trata, la expropiación por cuenta del Gobierno Nacional, dejando sus derechos a salvo a los propietarios para que reclamen la indemnización a que hubiere lugar en el término señalado por la ley, ante las autoridades correspondientes.

Quinto.—Se previene a los vecinos de Melchor Ocampo que quedan obligados a conservar, restaurar y propagar los bosques y arbolados que contengan los terrenos que se les dotan, sujetándose para ello, así como para su explotación, a las disposiciones de la Ley Forestal, respectiva.

Sexto.—Quedan igualmente obligados los vecinos beneficiados con la presente dotación a establecer y conservar en buen estado de tránsito los caminos vecinales respectivos, en la parte que se les concede.

Séptimo.—Inscribáanse en el Registro Público de la Propiedad, las modificaciones que sufra el inmueble afectado con la dotación concedida a Melchor Ocampo, para cuyo efecto remítase copia autorizada de la presente resolución a la Oficina correspondiente, por conducto de la Comisión Local Agraria del Estado de Hidalgo.

Octavo.—Esta resolución debe considerarse como título comunal para el efecto de amparar y defender la extensión total de los terrenos que la misma resolución comprende.

Noveno.—El Comité Particular Administrativo recibirá los terrenos ya mencionados y organizará la explotación comunal de los mismos, en acatamiento a lo dispuesto por el Artículo 27 Constitucional, en su párrafo séptimo, fracción VI.

Décimo.—Remítase copia autorizada de esta resolución al Delegado de la Comisión Nacional Agraria

en el Estado de Hidalgo, para su notificación a los interesados y su debido cumplimiento.

Décimo Primero.—Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, a los dieciseis días del mes de enero de mil novecientos treinta.—Emilio Portes Gil.—Rúbrica. Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos.—Marte R. Gómez.—Rúbrica. Secretario de Agricultura y Fomento, Presidente de la Comisión Nacional Agraria.

Es copia debidamente cotejada con su original.—Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, D. F., a 3 de febrero de 1930.—El Oficial Mayor de la C. N. A. Ing. Ignacio L. Figueroa.

2645

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Comisión Nacional Agraria.—Oficialía Mayor.

VISTO en revisión el expediente sobre dotación de ejidos, solicitada por los vecinos del pueblo de MANEY, Municipio y ex-Distrito de Huichapan, Estado de Hidalgo, y

Resultando Primero.—Que con fecha 18 de diciembre de 1926, los vecinos del pueblo de Maney solicitaron ante el C. Gobernador del Estado de Hidalgo dotación de tierras, quien con fecha 23 del mismo mes de diciembre turnó dicha solicitud a la Comisión Local Agraria para que se siguiera la tramitación correspondiente.

Resultando Segundo.—Que instaurado el expediente respectivo el 30 de diciembre de 1926, la Comisión Local Agraria mandó publicar la solicitud en el "Periódico Oficial" del Estado, de fecha 24 de enero de 1927. Dicha Comisión recabó los siguientes datos: que el pueblo de Maney posee 323 Hs. 48 As. de las cuales 30 Hs. están poseídas por un solo individuo llamado Luis García; que colinda al Norte con el rancho de Nazcazá, del señor Pedro Guerrero; al Sur con la hacienda de la Ciénega, propiedad del señor Maximino Verduzco; al Este con el Potrero de Caballerías, del señor Pedro Guerrero, y al Oeste con el rancho de Dandó Chico, de la Testamentaria del señor Ezequiel Mejía Galindo; que las fincas afectables son: la hacienda de La Ciénega y Juandó, del señor Maximino Verduzco, que posee actualmente una extensión de 8925 Hs. dentro del Estado de Hidalgo; la fracción del rancho de Santa Bárbara, que pertenece al señor Luis Sánchez, quien es propietario también de la hacienda de San Marcos, cuyas fincas tienen una extensión de 140 y 1003 Hs., respectivamente; que las demás propiedades citadas están fraccionadas y deben repartirse conforme a la ley; que el aspecto físico del terreno es plano; que el clima es templado; que el período de lluvias es ordinariamente de mayo a noviembre; que la estación ferroviaria más cercana a la de Huichapan a 6 kilómetros de distancia; que las poblaciones más cercanas se encuentran: Huichapan a 6 kilómetros y Tecozautla a 28 kilómetros.

que los vecinos se dedican al cultivo del maíz que tiene un rendimiento aproximado de 25 x 1.

Resultando Tercero.—Que notificados debidamente los propietarios de las haciendas afectables para designar representante común, se procedió a la formación de un censo agropecuario, habiendo intervenido en representación de dichos propietarios el señor Gerónimo Martínez por parte de la Comisión Local Agraria el C. Wilfrido Osorio y por parte de los vecinos el C. Martínez Ramírez. Dicho padrón quedó terminado el día 9 de mayo de 1928, habiendo arrojado un total de 256 individuos de los cuales se le taró con derecho a dotación 66. Respecto al censo pecuario dió un total de 99 cabezas de ganado vacuno, 29 de caballar, 17 de asnal, 73 lanar, 36 de porcino y 30 de cabrío.

Resultando Cuarto.—Que notificados debidamente los propietarios de las haciendas colindantes para que dentro de un plazo que concede la ley hicieran al censo las observaciones que creyeran pertinentes, ocurrieron en su defensa los CC. Pedro Guerrero Ríos, Luis Sanchez Sr., Sabino Beltrán, Luis Sánchez Jr., Maximino Verduzco, Adolfo Vilegas, Pedro Aguilar y Zaldivar en nombre propio y de sus hermanos Dolores y Rafael, y José L. Mejía apoderado jurídico de la Sucesión de Don Ezequiel Mejía Galindo, alegando lo que a sus derechos convino.

Resultando Quinto.—Que con fecha 9 de julio de 1929, la Comisión Local Agraria emitió su dictamen proponiendo una dotación de 32 Hs. de riego, tomadas de La Ciénega y Juandó 114-51-10 Hs. de temporal de segunda y 60 Hs. de cerril de dicha Hda.; y del rancho de Santa Bárbara 24 Hs. de temporal de segunda, tomando como base para la dotación a 68 individuos.

El C. Gobernador del Estado con fecha 17 de julio de 1929 falló en los mismos términos propuestos por la Comisión Local Agraria, habiéndose publicado su resolución en el "Periódico Oficial" del Estado, número 32, correspondiente al 24 de agosto de 1929 y habiéndose dado la posesión a los vecinos el 31 de julio del mismo año.

Resultando Sexto.—Que se remitió el expediente a la Comisión Nacional Agraria fijándose la cédula a que se refiere el artículo 84 de la Ley Reglamentaria vigente y en su oportunidad se notificó a los propietarios de las haciendas afectadas conforme al artículo 67 del mismo Ordenamiento. El propietario del rancho de Santa Bárbara expuso con este motivo lo que a su derecho convino.

Resultando Séptimo.—Que la Comisión Nacional Agraria al hacer la rectificación y estudio del censo respectivo, encontró que deben ser tomados como base para la dotación 66 individuos o sea el número que arrojó dicho censo.

Considerando Primero.—Que ha quedado demostrada la procedencia de la dotación solicitada por los vecinos del pueblo de "Maney," Municipio y ex-Distrito de Huichapan, Estado de Hidalgo, de acuerdo con los artículos 3º de la Ley de 6 de enero de 1915, 27 Constitucional y demás relativos de la Ley de 21 de marzo de 1929.

Considerando Segundo.—Que el censo agropecuario fue levantado de acuerdo con las disposiciones de la ley vigente, debiendo tenerse como base para

la dotación a 66 individuos, de conformidad con la rectificación hecha por la Comisión Nacional Agraria

Considerando Tercero.—Que de acuerdo con los datos recabados por la Comisión Local Agraria, las únicas fincas que pueden ser afectadas son la hacienda de La Ciénega y Juandó y la fracción del rancho de Santa Bárbara en la siguiente forma: tomando en cuenta que los 293-48 Hs. que realmente posee el pueblo bastan para cubrir las necesidades de 36.69 individuos a razón de 8 Hs. por parcela y siendo 66 los que tienen derecho, falta por dotar a 29 31 para cuyo efecto debían afectarse las fincas mencionadas en las siguientes proporciones tomando en cuenta su extensión, es decir, de las propiedades del señor Maximino Verduzco, que tiene una extensión de 8925 Hs., deberán tomarse tierras para satisfacer las necesidades de 26.1 individuos y de las del señor Luis Sánchez, que tiene 1143 Hs., las que basten para los 3.2 restantes. Ahora bien, tomando en cuenta las diferentes clases de tierras, deberán afectarse las mencionadas propiedades en la forma siguiente: de la del señor Maximino Verduzco se tomarán 32 Hs. de riego para cubrir las necesidades de 8 individuos a razón de 4 Hs. cada uno; 60 Hs. de terreno cerril-pastal a razón de 10 Hs. para 6 individuos y 98-80 Hs. de temporal de segunda para 12.1 individuos a razón de 8 Hs. De las propiedades del señor Sánchez se tomarán 25-60 Hs. de temporal de segunda para 3 2 individuos, ascendiendo la dotación en total a 214-40 hectáreas.

Considerando Cuarto.—Que para cubrir la dotación de las 214 Hs. 40 As., deben expropiarse por cuenta del Gobierno Nacional, dejando su derecho a salvo a los propietarios para que reclamen la indemnización a que hubiere lugar, en el tiempo y forma prescritos por la ley, haciéndose las inscripciones del caso con motivo de las modificaciones que sufran los inmuebles afectados con la dotación.

Considerando Quinto.—Que habiéndose declarado de utilidad pública la conservación y propagación de los bosques y arbolados en todo el Territorio Nacional, debe advertirse a la comunidad beneficiada con la dotación la obligación que contrae de conservar, restaurar y propagar los bosques y arbolados que contengan los terrenos que se les conceden.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 3º, 9º y 10 de la Ley de 6 de enero de 1915, 27 Constitucional, 135 y demás relativos de la Ley Reglamentaria en vigor, el suscrito, Presidente de la República de acuerdo con el parecer de la Comisión Nacional Agraria, debia resolver y resuelve:

Primero. Es procedente la dotación de tierras solicitado por los vecinos del pueblo de "Maney", Municipio y ex-Distrito de Huichapan, Estado de Hidalgo.

Segundo.—Se modifica la resolución del C. Gobernador de la citada Entidad Federativa, de fecha 17 de julio de 1929, en los siguientes términos:

Tercero.—Es de dotarse y se dota a los vecinos del mencionado pueblo de "Maney" con 214 Hs. 40 As. (Doscientas Catorce Hectáreas, Cuarenta Areas) que se tomarán de la hacienda de La Ciénega y Juandó y fracción del rancho de Santa Bárbara, en la siguiente forma: de la hacienda de La Ciénega

nega y Juandó, propiedad del señor Maximino Verdusco, se tomarán 32 Hs. de riego, 96 Hs. 80 As. de temporal de segunda y 60 Hs. de cerril-pastal y de la fracción del Rancho de Santa Bárbara perteneciente al señor Luis Sánchez, 25 Hs. 60 As. de temporal de segunda. Dichas superficies pasarán al pueblo de que se trata con todos sus usos, acciones, costumbres y servidumbres, localizándose de acuerdo con el plano que forme el Departamento Técnico de la Comisión Nacional Agraria, aprobado por quien corresponda. Respecto de las 32 Hs. de riego que se tomarán de la primera de dichas fincas, el Departamento de Aguas de la Comisión Nacional Agraria fijará el coeficiente respectivo.

Cuarto.—Decrétase para cubrir la dotación de que se trata, la expropiación por cuenta del Gobierno Nacional, dejando sus derechos a los propietarios para que reclamen la indemnización a que hubiere lugar, en el término señalado por la ley, ante las autoridades correspondientes.

Quinto.—Se previene a los vecinos del pueblo de Maney que quedan obligados a conservar, resguardar y propagar los bosques y arbolados que contengan los terrenos que se les dotan, sujetándose para ello, así como para su explotación, a las disposiciones de la Ley Forestal respectiva.

Sexto.—Quedan igualmente obligados los vecinos beneficiados con la presente dotación a establecer y conservar en buen estado de tránsito los caminos vecinales respectivos, en la parte que les concierne.

Séptimo.—Inscribáse en el Registro Público de la Propiedad las modificaciones que sufran los inmuebles afectados con la dotación concedida al pueblo de "Maney" para cuyo efecto remítase copia autorizada de la presente resolución a la oficina correspondiente, por conducto de la Comisión Local Agraria del Estado de Hidalgo.

Octavo.—Esta resolución debe considerarse como título comunal para el efecto de amparar y defender la extensión total de los terrenos que la misma resolución comprende.

Noveno.—El Comité Particular Administrativo recibirá los terrenos ya mencionados y organizará la explotación comunal de los mismos, en acatamiento a lo dispuesto por el Artículo 27 Constitucional, en su párrafo séptimo, fracción VI.

Décimo.—Remítase copia autorizada de esta resolución al Delegado de la Comisión Nacional Agraria en el Estado, para su notificación a los interesados y su debido cumplimiento.

Undécimo.—Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación y en "Periódico Oficial" del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, a los nueve días del mes de enero de mil novecientos treinta.—Emilio Portes Gil.—Rúbrica.—Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos.—Marte R. Gómez.—Rúbrica.—Secretario de Agricultura y Fomento, Presidente de la Comisión Nacional Agraria.

Es copia debidamente cotejada con su original.

Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, D. F., a 10 febrero de 1930.—El Oficial Mayor de C. N. A., Ing. Elpidio Rodríguez.

SECCION DE AVISOS

2609

Señor Secretario de Agricultura y Fomento.
Dirección de Aguas, Tierras y Colonización e Irrigación.—México, D. F.

NORBERTO ARANZABAL, ciudadano mexicano, mecánico, mayor de edad, señalando como domicilio los Talleres Mecánicos establecidos en la esquina de la Avenida Cuauhtémoc y calle de Gómez Pérez de la ciudad de Pachuca, ocurro a Ud. por mi propio derecho y respetuosamente digo:

Que vengo a solicitar que me conceda el aprovechamiento de las aguas del manantial llamado "BANOS DEL ZOQUITAL" que han sido declarados de jurisdicción Federal con fecha 9 de julio del año en curso, según publicación que tengo a la vista en el "Periódico Oficial" del Gobierno del Estado de Hidalgo de fecha 16 de agosto que acaba de pasar.

Cumpliendo con la ley, manifiesto a Ud. lo que sigue:

1.—Nombre del solicitante.—El que ya consta arriba, con su domicilio.

2.—Las aguas de que se trata son las que brotan en el repetido manantial Baños del Zoquital. El aprovechamiento sería en el lugar mismo de su alumbramiento y las aguas sobrantes podrían ser aprovechadas sin perjuicio alguno en otros usos puesto que serían devueltas a unos cuantos metros del lugar de su nacimiento.

3.—Los usos a que destinaría yo esas aguas son industriales, esas aguas tienen carácter medicinal reconocido y pretendo establecer en el lugar de su aprovechamiento (inmediato al de su nacimiento, como antes digo) unos baños termales terapéuticos.

4.—El volumen de aguas que necesito aprovechar es el total de las que produce el manantial.

5.—Las aguas sobrantes caerán, sin merma alguna a su cause natural, bien para ser aprovechadas en riego de tierras o para afluir al río de Amajac, confuente a su vez del Pánuco.

Como están cumplidos todos los requisitos de la Ley de aguas, vengo a solicitar a Ud. atentamente que se sirva tramitar conforme a la misma y su reglamento, la anterior petición.

Pachuca, septiembre 3 de 1929.—Norberto Aranzabal.—Rúbrica.

3-2

Administración de Rentas.—Pachuca.—Derechos enterados, marzo 7 de 1930.—Recibido, marzo 8 de 1930.

JUDICIALES

2740

DISTRITO DE TULANCINGO.

JUZGADO CONCILIADOR DE SINGUILUCAN.

EDICTO DE REMATE.

Sirviendo base avalúo mil ochocientos pesos, remátase en local este Juzgado, a las nueve horas del tercer día posterior a última publicación en Periódico Oficial, la casa número 46 de la Calle Independencia de esta Cabecera, secuastrana a la sucesión del señor Teófilo López. Convócanse postores.

Singuilucan, 3 de marzo de 1930.—Emilio Liébano, Srío.

3-1

Administración de Rentas.—Tulancingo.—Derechos enterados, marzo 3 de 1930.—Recibido, marzo 12 de 1930.

2488

JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO DE PACHUCA.

EDICTO.

Se cita a los herederos y acreedores del señor Zenaido Meneses, vecino que fué de Jagtley de Téllez, para que concurren a la formación del inventario de los bienes hereditarios, que se verificará a las once horas del quinto día útil inmediato posterior a la última publicación de este edicto en el "Periódico Oficial" del Estado, donde

se publicará por tres veces seguidas, lo mismo que en "Vanguardia".

Pachuca, febrero 26 de 1930.—El Actuario, *Eduardo Calderón*. 3-2

Administración de Rentas.—Pachuca.—Derechos enterados, marzo 4 de 1930.—Recibido, marzo 5 de 1930.

2515

JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO DE PACHUCA.
PUBLICACION.

Se ha presentado el menor de edad Alberto Esteban Guevara en este Juzgado, solicitando habilitación de edad, en vía de jurisdicción voluntaria, y obra, un escrito que en lo conducente, dice:

"Alberto Esteban Guevara, menor de edad, señalando para notificaciones la casa número 43 de la 4ª calle de Morelos, ante usted como mejor proceda, digo: Que no estoy sujeto a patria potestad por haber muerto mis padres y ascendientes a quienes corresponde ejercer ese derecho y estoy tutelado por el señor Conrado Romero, que fué nombrado mi tutor por la señora mi madre doña Alberta Curiel, en su testamento que obra en los autos del juicio testamentario radicado en el Tribunal del digno cargo de usted y que pido se tenga a la vista, conforme al artículo 123 fracción III, Código de Procedimientos Civiles.—Que soy menor de 18 años, según es de verse por lo asentado en la cláusula tercera del precitado testamento.—Que con la información testimonial que en éste solicito acreditaré que observo buena conducta y tengo aptitud para administrar mis bienes y litigar.—Por lo expuesto y con apoyo en las disposiciones de los artículos 568 del Código Civil y 1755 del de Procedimientos Civiles.—A usted suplico se sirva: I. Tenerme por presentado promoviendo en vía de jurisdicción voluntaria habilitación de edad para administrar mis bienes, cotra- tar y litigar; II. Mandar publicar esta mi solicitud en el "Periódico Oficial" del Estado y "Observador" si se juzgare suficiente, como lo previene el artículo 1756 del citado Código de Procedimientos; III. Señalar día y hora para la información testimonial que solicito rendir conforme al siguiente interrogatorio... Protesto lo necesario. Pachuca, agosto 22 de 1929.—Alberto E. Guevara.—Conrado Romero.—Rúbricas".

Pachuca, a seis de agosto de mil novecientos veinti- nueve.—Publíquese la anterior solicitud, por tres veces consecutivas en el "Periódico Oficial" y "Vanguardia", y recíbese la información testimonial que se ofrece el día diez a las diez horas. Lo proveyó el suscrito Juez. Doy fé. J. Flores Aguirre.—S. Esqueda, Srio.—Rú- bricas".

Lo que se hace del conocimiento del público en general, de acuerdo con el artículo 1756 del Código de Procedi- mientos Civiles.

Pachuca, a 10 de febrero de 1930.—El Actuario, *Eduar- do Calderón*. 3-2

Administración de Rentas.—Pachuca.—Derechos en- terados, marzo 4 de 1930.—Recibido, marzo 6 de 1930.

2529

JUZGADO 1º DE 1ª INSTANCIA DEL DISTRITO ATOTONILCO EL GRANDE.
EDICTO.

Se convoca por medio del presente a los que se crean con derecho a los bienes yacentes de la Testamentaria del señor Don Melquiades Rodríguez, vecino que fue de esta población, para que dentro del término de quince días a partir de la última publicación en el "Periódico Oficial" del Estado, se presenten a este Juzgado a dedu- cir sus derechos.

Atotonilco el Grande, Hgo., 21 de febrero de 1930.
El Secretario, *E. Villarreal Barranco*. 3-2

—Administración de Rentas.—Atotonilco el Grande.
—Derechos enterados, febrero 28 de 1930.—Recibido, marzo 6 de 1930.

2124

MUNICIPIO DE PACHUCA.
JUZGADO 2º CONCILIADOR.
EDICTO.

Pachuca, febrero diez de mil novecientos treinta.— Por presentado Samuel Arias demandando a Gonzalo Solís pago de honorarios, gastos y costas; córrasele tras- lado y emplácese por Edictos que se publicarán seis veces consecutivas en el "Periódico Oficial" y "Van- guardia" de esta ciudad, para contestarla dentro de los tres días siguientes a la última publicación en el "Peri- ódico Oficial". Lo proveyó y firmó el Juez Segundo Con- ciliador. Doy fé.—*Francisco Guerrero*.—*Francisco V. Contreras*, Srio.—Rúbrica. 6-3

Recibido, febrero 26 de 1930.

2264

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA DEL DISTRITO DE METZTITLAN.
EDICTO

En los autos de la intestamentaria de la señora Petra Cortés de Soberanes, vecina que fue de Metzquitlán, se ha mandado que se convoque a las personas que se consideren con derecho a los bienes de la expresada sucesión, para que se presenten a deducirlo en el término de treinta días, contados desde la última publicación de este edicto, que se hará por tres veces de ocho en ocho días en el "Periódico Oficial" del Estado y en "Van- guardia", que se edictan en Pachuca.

Lo que se hace saber por el presente en cumplimiento de lo mandado.

Metztitlán, 18 de febrero de 1930.—Asistencia, *Domin- go Ortega*.—Asistencia, *Juan de la Parra*. 3-3

Administración de Rentas.—Meztitlán.—Derechos en- terados, febrero 20 de 1930.—Recibido, febrero 27 de 1930.

2306

JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO DE PACHUCA.
NOTIFICACION.
EDICTO.

Señora Luz Cussi de Toriello.

Se ha presentado el señor Fernando Toriello, deman- dando el divorcio necesario de su esposa la señora Luz Cussi de Toriello, y el ciudadano Juez por auto de 26 de los corrientes dió entrada a la demanda, dictando el auto que a la letra dice:

..... Por presentado Fernando Toriello con esta demanda y copias y documentos que se acompañan; se admite la demanda que entabla en contra de la señora Luz Cussi de Toriello; emplácese a la demandada para que conteste la demanda dentro de los diecisiete días siguientes a la notificación de este auto, notifíquesele por medio de edictos que se publicarán por seis veces consecutivas en el "Periódico Oficial" del Estado y "El Nacional" que se edicta en la ciudad de México, hágasele saber que las copias del traslado están a su disposición en este Juzgado; prevéngasele designe domicilio en esta ciudad para oír notificaciones apercibida de que de no ha- cerlo, se le harán las notificaciones por cédula; prevén- gasele igualmente que de no contestar la demanda den- tro del término señalado, se le tendrá por contestada en sentido negativo. Dése al Ministerio Público la Inter- vención que le corresponde. Todo con fundamento en los artículos 82, 895, 901, 905 y 906 del Código de Pro- cedimientos.—Así definitivamente lo proveyó y firma el C. Juez de lo Civil de este Distrito. Doy fé.—S. Arias.— C. Gómez Quesada, Srio.—Rúbricas".

Y lo notifico a usted de acuerdo con el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en vigor, que surtirá sus efectos de notificación en forma.

Pachuca, 26 de febrero de 1930.—El Actuario del Juz- gado, *Eduardo Calderón*. 6-3

Recibido, febrero 27 de 1930.

DIVERSOS

DISTRITO DE PACHUCA
RECAUDACION DE RENTAS DE TIZAYUCA.A V I S O
PRIMERA ALMONEDA.

Se hace del conocimiento del público en solicitud de postores que el 20 de los corrientes, a las once horas del día, en los estrados de esta Oficina, tendrá verificativo la Primera Almoneda de los dos terrenos ubicados en el pueblo de Huitzila de este Municipio, embargados al C. Cesareo F. Pineda, por el adeudo de contribuciones que reporta a la Hacienda Pública del Estado; admitiéndose las posturas que ajustadas a la Ley cubran las tres cuartas partes de la cantidad de \$885.00 (ochocientos noventa y cinco pesos), valor fiscal que representan dichas propiedades.

Tizayuca, Hgo., marzo 1º de 1930.—El Recaudador de Rentas, *Erasmo Bustamante*. 1—1

Recaudación de Rentas.—Tizayuca. Derechos enterados, marzo 10 de 1930.—Recibido, marzo 15 de 1930.

2757
ADMINISTRACION DE RENTAS DEL DISTRITO
DE JACALA.A V I S O.
SEGUNDA ALMONEDA.

Por adeudo de contribuciones, esta Administración de Rentas ha embargado a la Compañía Cortes Associated Mines, S. A., las fincas siguientes:

DESCRIPCION.	VALOR FISCAL.
Terreno "El Sauz" y dos anexos,	\$ 180.00
Terreno "Toribio"	250.00
Terreno "La Estaca"	31.00
CASA, en la Plaza de la Independencia.	2000.00
TOTAL \$ 2461.00	

Estos predios están ubicados en esta Cabecera, y se ha dispuesto se saquen a remate en subasta pública, que tendrá lugar en local de esta Oficina a las diez horas del décimo quinto día útil siguiente al de la última publicación de este aviso en los periódicos "Oficial del Estado" y "Vanguardia" que se editan en la Ciudad de Pachuca; en el concepto de que serán posturas admisibles aquellas que cubran las tres cuartas partes del valor Fiscal señalado, del que se deducirá el correspondiente diez por ciento a que se refiere el Art. 146 reformado de la Ley Orgánica de Hacienda, Núm. 523 del Estado.

Jacala, Hgo., a de marzo de 1930.—El Administrador de Rentas, *Salvador Mayorga*. 3—1
Recibido, marzo 12 de 1930.

2800
ADMINISTRACION DE RENTAS DEL DISTRITO
DE TULANCINGO.A V I S O.
TRECERA ALMONEDA.

No habiéndose verificado el día 27 de febrero próximo pasado, por falta de postores, el remate de la casa ubicada en la 1ª Av. 21 de Marzo de esta Ciudad, embargada a la Sucesión de la Srta. Ma. de Jesús García Otamendi, por adeudo de contribuciones en cantidad de . . . \$ 5,034.41 más lo que se haya causado por el mismo concepto y gastos de cobranza, se convoca a la Tercera Almoneda que tendrá lugar el día veinte del presente mes, a las diez horas en los estrados de esta Oficina.

Se hace saber al público en demanda de postores, en la inteligencia de que siendo el valor de dicha propiedad la suma de \$ 6,480.00 deducido ya el 10% de su primitivo precio, serán admisibles las posturas que cubran las tres cuartas partes, siempre que vengan garantizadas con los requisitos de Ley.

Tulancingo, Hgo., Marzo 1º de 1930.—El Administrador de Rentas, *Modesto S. Martínez*. 1—1

Administración de Rentas.—Tulancingo.—Derechos enterados, marzo 4 de 1930.—Recibido, marzo 14 de 1930.

2859
ADMINISTRACION DE RENTAS DEL DISTRITO
DE HUEJUTLA.A V I S O
SEGUNDA ALMONEDA.

Con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Hacienda núm. 867 en vigor, cítese a la segunda almoneda en calidad de remate de la finca Rústica denominada "Huilona", "Atempa" o la "Mariana", ubicada en la extinguida Hacienda de San Antonio del Municipio de Orizatlán de este Distrito, y la cual se llevará a efecto en los estrados de esta Oficina, a las once horas del día quince del entrante mes de Abril, y embargada a la testamentaria a bienes de Bernardo Herrera, por adeudo de contribuciones, sirviendo de base para las posturas las que cubran las tres cuartas partes de (\$ 1,080.00) mil ochenta pesos, que resulta después de haber deducido un primer diez por ciento, indicándose que solo se aceptarán las proposiciones que estén arregladas conforme a la Ley y con el previo depósito en la Caja de esta Administración.

Lo que se publica en demanda de postores.

Huejutla, Hgo., a primero de marzo de mil novecientos treinta.—El Administrador de Rentas, *Melquiades Licona*. 3—1

Administración de Rentas.—Huejutla.—Derechos enterados, marzo 4 de 1930.—Recibido, marzo 14 de 1930.

2642
DISTRITO DE TULA.PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TETEPANGO.
A V I S O.

A disposición de esta Presidencia, como bienes mostrencos se encuentran los siguientes animales: Burro pardo, Burra parda, Burra prieta con cria, Burro pardo, Ternera prieta, Burro prieto, Burro prieto, Burra parda con cria, Burra parda, Ternera pinta, Burra parda, Burra prieta con cria, Burro prieto, Burra parda, Torito Prieto, Torito Colorado, Burra prieta, Burro prieto, Burro tordillo, Burro pardo, Burra Tordilla y Burra prieta respectivamente, fierros señas constan expediente respectivo, valorizados por peritos en \$ 10.00, \$ 8.00, \$ 10.00, \$ 12.00, \$ 30.00, \$ 5.00, \$ 9.00, \$ 15.00, \$ 12.00, \$ 5.00, \$ 7.00, \$ 11.00, \$ 16.00, \$ 13.00, \$ 15.00, \$ 11.00, \$ 4.00, \$ 8.00, \$ 6.00, \$ 10.00, \$ 9.00.

Publíquese para los efectos legales conforme al artículo 681 del Código Civil del Estado

Tetepango, marzo 3 de 1930.—El Presidente Municipal *Eustolio Becerra*.—El Secretario, *Crescencio Sánchez Mera*. 3—1

Recaudación de Rentas.—Tetepango.—Derechos enterados, marzo 3 de 1930.—Recibido, marzo 8 de 1930.

2220
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOLANGO.
A V I S O.

A disposición esta Presidencia, como mostrenco encuéntrase un torete prieto como de tres años de edad; seña y fierro constan expediente respectivo, valorizado treinta pesos

Publíquese "Periódico Oficial" cuatro veces consecutivas.

Molango, 28 de enero de 1930.—El Presidente Municipal Constitucional, *Dr. José Trinidad Cano*.—El Secretario, *Ignacio F. Vega*. 4—1

Administración de Rentas.—Molango.—Derechos enterados, enero 30 de 1930.—Recibido, febrero 27 de 1930.

TALLERES LINOTIPOGRAFICOS
DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO